

Según prudentes estimaciones, en el último terremoto que azotó a Bucarest perdieron la vida dos mil quinientas personas; sin embargo, cálculos exactos han determinado que unas cuatro mil personas murieron bajo los escombros. Esa cifra habría sido inferior por lo menos en quinientas si el municipio hubiera actuado en contra de la orden expresa del funcionario competente de la administración de Bucarest de allanar los escombros de un hotel totalmente destruido, en lugar de quitarlos, y hubiera quitado esos escombros. Todavía una semana después del terremoto, la gente oía los gritos de cientos de personas sepultadas, que salían de los escombros. El funcionario de la administración municipal, sin embargo, hizo cercar la zona del hotel hasta que le comunicaron que bajo los escombros no se movía absolutamente nada y que tampoco se oía ya ruido alguno. Hasta dos semanas y media después del terremoto no se permitió a los habitantes de Bucarest recorrer el montón de escombros, que fue totalmente allanado en la tercera semana. Al parecer, por razones de costo, el funcionario renunció al salvamento de unos quinientos huéspedes sepultados del hotel destruido. El salvamento hubiera costado mil veces más que el allanamiento, sin tener en cuenta siquiera el hecho de que, probablemente, se habría sacado de los escombros a cientos de personas gravemente heridas que el Estado hubiera tenido que mantener luego durante toda su vida. Como es natural, según se dice, el funcionario se cercioró de la conformidad del Gobierno rumano. Al parecer, es inminente su ascenso a un puesto oficial más alto.